



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

FLP 7024/2015/44/CA21

La Plata, 11 de julio de 2025.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en este expediente N° FLP 7024/2015/44/CA21 caratulado "Incidente de extinción de la acción en autos: P M; Corrillo T y otros por evasión...", que proviene del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2.

### CONSIDERANDO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de primera instancia, en tanto declara extinguida la acción penal por prescripción respecto de P M en Comandita por Acciones y sobresee a dicha persona jurídica con relación a los presuntos delitos de evasión del impuesto a las ganancias por los períodos 2013, 2014, 2015 y 2016, y del impuesto al valor agregado por los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

II. La apelación inicial fue presentada por la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, y mantenida e informada por el subrogante en la Fiscalía General ante la Cámara.

La recurrente realiza un análisis de las sanciones previstas para las personas jurídicas, conforme el artículo 14 de la ley 24.769, modificada mediante ley 27.635.

De seguido, asevera que el régimen penal tributario y el código de fondo no reconocen en el caso de aquéllas un plazo de prescripción diferencial asimilable al que aplicó el juez.

Opina que el lapso a valorar debería ser equivalente a la escala máxima, en abstracto, para las personas humanas que resultaren responsables por el ilícito principal, sin tomar en cuenta la pena concreta que en definitiva pueda aplicarse.



Expone que la cuantía adecuada al presente sería la del artículo 65, inciso 2°, del Código Penal, a partir de la calificación provisoria para cada hecho en cuestión -evasión agravada- que prevé un máximo de nueve (9) años de prisión.

Incluye en su desarrollo un cuadro ilustrativo, sintetizando los distintos hechos presuntamente ilícitos y sus variados momentos de consumación para así determinar, de acuerdo a su criterio, la fecha de prescripción que correspondería a cada uno de ellos.

En su informe, el representante del Ministerio Público Fiscal profundiza sus argumentos en torno a que en este supuesto, la pena de inhabilitación perpetua no debería tomarse como punto de partida para computar el plazo de extinción.

Indica que tal cálculo sería válido si el delito de evasión fiscal agravada estuviera reprimido únicamente con esa pena, lo cual no se verifica en la respectiva norma.

En respaldo de su postura, cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y de la Cámara Federal de Casación Penal.

III. El siguiente recurso fue interpuesto e informado por la querellante Dirección General Impositiva y Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Sus fundamentos presentan identidad con los reseñados en el considerando precedente.

Específicamente, la acusadora particular alega que el término de validez de la acción penal, en tanto nace de un único hecho, debería ser el mismo para las personas de existencia real e ideal, aun a pesar de que las penas privativas de la libertad no puedan ser aplicadas a estas últimas.

Cita y analiza diversos fallos de la Cámara Federal de Casación Penal para secundar su pretensión.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

FLP 7024/2015/44/CA21

Formula reservas de recurrir en casación y del caso federal.

El memorial sigue iguales lineamientos. Señala además que, como requisito previo para examinar los plazos de prescripción, sería necesario actualizar los antecedentes penales de los encartados. Mantiene las reservas efectuadas.

IV. Por su parte, la defensa particular de P M Sociedad en Comandita por Acciones brindó sus propias razones para convalidar el sobreseimiento cuestionado.

V. A través de la resolución apelada, el juez de primera instancia hizo lugar al pedido original de la defensa y declaró la extinción de la acción penal por prescripción con respecto a la empresa antes mencionada.

Para así decidir, consideró el tiempo transcurrido desde cada evasión atribuida y advirtió la ausencia de causales de suspensión o interrupción.

Luego explicó que la sanción más gravosa que la ley dispone para la persona de existencia ideal es la suspensión total de actividades. Entendió que ésta se asemeja a la pena de inhabilitación perpetua, y declaró de aplicación el plazo de cinco (5) años que establece el artículo 62, inciso 3°, del Código Penal.

VI. Conforme los agravios reseñados, la actual discusión recae sobre la determinación del plazo de prescripción de la acción penal con relación a la persona jurídica involucrada en infracciones al Régimen Penal Tributario, que el juez de primera instancia fijó en el parámetro especial de cinco (5) años independientemente del tipo de evasión agravada.

En oposición, la tesitura que impulsan las partes acusadoras consiste en computar la pena mayor de la escala prevista por aquella figura, reparando en el límite superior de una eventual condena sobre los agentes activos del ilícito.



El análisis de la controversia debe comenzar examinando el propio texto de las normas en juego. Por un lado, el período de 5 años utilizado procede "cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua" (artículo 62, inciso 3°, del Código Penal).

Sin embargo, la previsión especial de fondo reza que para delitos tributarios "realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente" (artículo 14, segundo párrafo, de la ley 24.769), lo cual es seguido de seis incisos con una opción distinta cada uno: multa, suspensión de actividades, exclusión de concursos y licitaciones, cancelación de personería, restricción de beneficios estatales, y publicidad de la condena.

No puede soslayarse que esta peculiar previsión no conmina una sola pena sino que deja a criterio del tribunal sentenciante la imposición de distintas sanciones de índole penal, certeza que obliga a discrepar con el magistrado y a descartar la aplicación extensiva de la hipótesis del Código Penal según se planteó en el pronunciamiento impugnado.

VI. En un segundo tramo del análisis, devienen atendibles las críticas de las recurrentes en lo que se refiere a la exigencia de ponderar en abstracto la escala penal prevista en la figura del delito principal, como regla indefectible para inferir el espacio temporal en que el estado conserva su potestad de persecución punitiva.

Como sustento, cabe mencionar la posición que ha sido sostenida, en términos uniformes, por las cuatro salas de la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto a que el plazo de prescripción referido a personas jurídicas "es -al igual que para las personas físicas- el que surge de considerar la pena más grave





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

FLP 7024/2015/44/CA21

con la que se conmina el delito de que se trate, que en el caso tiene adjudicada la pena de prisión", por lo que se extingue únicamente en la medida que haya transcurrido el máximo de años previsto para el delito en que encuadrare el hecho. A modo ejemplificativo, cabe citar, entre muchos otros precedentes: CFCP, Sala I, causa N° CPE 90000027/2012/TO1/3/CFC2 "PUNTAR, Pedro Juan s/recurso de casación", registro 1492/19, 22/08/2019; CFCP, Sala II, causa N° CPE 202/2009/5/CFC1 "Plastipren SCA s/recurso de casación", registro N° 292/17, 20/03/2017; CFCP, Sala III, causa N° CPE 1598/2011/TO2/6/CFC2 "AFIP-DGA Ormazabal, María J. s/recurso de casación", registro N° 2020/19, 23/10/2019; CFCP, Sala IV, causa N° CPE 1818/2010/TO3/12/CFC3 "Jets Marivent Iberoamérica S.R.L. s/recurso de casación", registro N° 352/21.4, 5/04/2021.

En virtud de resultar acertados los argumentos volcados al agravarse las apelantes contra el sobreseimiento dictado en primera instancia, se impone hacer lugar a los recursos deducidos.

Como consecuencia, corresponderá al juez a quo realizar un nuevo cómputo del curso para cada uno de los delitos por los que se ha perseguido penalmente a la sociedad involucrada, con el objeto de distinguir con mayor precisión la vigencia de las respectivas acciones según el tiempo transcurrido desde cada acontecimiento puntual.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución apelada, en todo cuanto decide y ha sido motivo de agravio, indicando al juez de primera instancia que deberá someter a nuevo análisis los plazos de vigencia de la acción penal con ajuste a las pautas establecidas en la presente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, que deberá cumplir con las restantes notificaciones de rigor.



CESAR ALVAREZ  
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS  
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

LAUREANO ALBERTO DURAN  
SECRETARIO DE CAMARA

Se deja constancia de que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el artículo 31 bis, último párrafo del CPPN (artículo 109 RJN).

LAUREANO ALBERTO DURAN  
SECRETARIO DE CAMARA

